



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, primero de julio de dos mil veintidós

A21-229

REFERENCIA: APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE: SONIA ELENA BETANCUR AMARILES
DEMANDADO: FERNEY ADOLFO GÓMEZ VALENCIA
RADICADO: 05001-31-05-016-2019-00405-01
DECISIÓN: CONFIRMA auto que declara NO probada excepción previa de cosa juzgada.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión proferida el 24 de junio de 2021 mediante la cual el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín declaró NO probada la excepción previa de cosa juzgada.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 20** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Pretende la parte actora, en síntesis, que tras declarar la existencia de una relación laboral entre enero de 2009 y el 18 de agosto de 2017, que culminó sin mediar justa causa, se condene al señor FERNEY ADOLFO GÓMEZ VALENCIA a reconocer y pagar: las horas extras, dominicales y festivos causados; las cesantías, intereses a las cesantías, prima y vacaciones correspondiente a todo el tiempo laborado; auxilio de transporte; la indemnización por perjuicios por el no suministro de dotación de ropa y calzado; la indemnización por despido sin justa causa; la sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST; los aportes al Sistema General de Pensiones con destino a Protección S.A.; la indexación de las condenas y las costas del proceso.

- Como hechos relevantes, respecto del asunto que aquí nos convoca, sostuvo que laboró en una panadería propiedad del señor Adolfo Gómez mediante un contrato de trabajo verbal, sin que le hubiesen pagado en los extremos referenciados los haberes deprecados, habiendo fenecido la relación con ocasión de su estado de salud. Narra los inconvenientes que generaron la concesión de permisos.
- Luego de admitirse la demanda y surtirse los trámites de notificación, se pronunció el señor FERNEY ADOLFO GÓMEZ VALENCIA. Aceptó la existencia del contrato de trabajo, así como sus extremos, frente a las horas extras precisa que eran pagadas de manera oportuna. Niega ser conocedor del estado de gravidez de la actora, y destaca que concedía los permisos que esta requería para acudir a terapias o citas médicas. Frente a la terminación del contrato de trabajo se sujetó a lo anotado mediante documento privado suscrito el 18 de mayo de 2018, cuyos apartes extracta, a través del cual efectuó un pago a la actora por \$13.000.000. con base en ello formuló como excepción previa la que denominó *cosa juzgada*.
- En audiencia celebrada el 24 de junio de 2021 se declaró NO probado dicho medio exceptivo, condenándose en costas a la parte actora, fijándose como agencias en derecho la suma de \$700.000 a favor de la demandante. Contra esta determinación la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL DEMANDADO AL FORMULAR LA EXCEPCIÓN

Expresamente indicó que:

El artículo 32 del código procesal del trabajo dicta: "El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo."

Por su parte el artículo 243 de la Constitución Política dicta: "Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control Jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexecutable por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución"

Al respecto cabe señalar tal como se ha venido argumentado dentro de la contestación, que si bien las partes no llegaron a ningún acuerdo en la audiencia de conciliación que se celebró en la inspección de trabajo el 23 de febrero de 2018, las partes por intermedio de sus abogados que previamente los habían asesorados, suscribieron un documento privado

que se puede asemejar a un contrato de transacción, en el que se solucionaron los hechos sobre los cuales actualmente está demandando la señora SONIA ELENA BETANCUR AMARILES, por lo tanto ya hicieron tránsito a cosa juzgada, toda vez que sobre cada uno de ellos se había llegado a un acuerdo, que fue escrito y firmado por las partes, también cabe señalar que el artículo 2469 del código civil dicta: "La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual" es preciso advertir que las partes suscribieron este documento en la búsqueda de evitar un litigio, y de esta manera evitar el "desgaste" que implica un proceso (sic) labora, además con la finalidad de no sobrecargar más de lo que ya se encuentra la rama judicial por la cantidad de pleitos pendientes por resolver, en gracia de discusión las partes acordaron la suma de:

"CUATRO MILLONES CIENTO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS COP - \$ 4'100.465 por concepto de bonificación.

2.3.2 La suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS - COP - \$ 8' 889.535 par concepto de liquidación de prestaciones sociales (Prima de servicios cesantías e intereses a las cesantías) y par concepto de vacaciones remuneradas de conformidad con los artículos 182 a 192 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARAGRAFO 2: En virtud del pago de los conceptos de que da cuenta los numerales 3.1 a 3.5 de este escrito, menos el descuento autorizado en el párrafo anterior, quedan canceladas las acreencias laborales causadas en razón de los antecedentes que sirven de base a este escrito, y, por tanto, EL EMPLEADOR, queda a PAZ Y SALVO con respecto a la empleada por todo concepto, como salarios, prestaciones sociales (cesantías, intereses a la cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnizaciones y sanciones moratorias)"

2.2. ARGUMENTOS DEL JUEZ AL RESOLVER LA EXCEPCIÓN PREVIA

Advirtió que la transacción, en nuestro ordenamiento laboral, NO tenía efectos cuando se trataba de asuntos que versaran sobre derechos ciertos e indiscutibles. Preciso que si bien en la transacción NO se discriminaban los factores o valores sobre los cuales se liquidó, pues simplemente se hacía un cálculo indicando que era por todo concepto, debía entonces mediar un estudio previo de las pretensiones antes de examinar dicha transacción, tornándose necesario, en su criterio, verificar si en efecto versaba sobre todos los conceptos. Que en tal sentido, si ya se había aceptado la relación laboral, no solamente en la contestación de la demanda sino además en la misma transacción, y hay un incumplimiento con los pagos de la seguridad social, estos obviamente NO habrían quedado incluidos, por lo que tal acuerdo NO resultaba procedente. Así las cosas, debía evacuarse la etapa probatoria en aras de establecer cuáles eran los derechos y a cuánto equivalía, siendo esta la única forma de analizar si el valor transigido cubría mínimamente esos derechos ciertos e indiscutibles, de acuerdo a lo previsto en el art. 15 del CST.

2.3. RECURSO DE APELACIÓN DEL DEMANDADO

Reconoció que si bien NO se discriminaban los montos pagados, lo cierto es que el contrato de transacción versaba sobre unos derechos inciertos, de ahí que la intención de las partes al suscribirlo fue precaver un futuro litigio, razón por la cual debía tenerse en cuenta el acuerdo que existía sobre estos temas.

Reitera que los conceptos deprecados por la demandante ya fueron objeto de un acuerdo, suscrito de manera libre y voluntaria, el cual fue cumplido por el demandado, por lo que NO tenía asidero la acción, incoándose la respectiva acción por asuntos que ya habían sido transigidos.

2.4. ALEGATOS PRESENTADOS POR EL SEÑOR FERNEY ADOLFO GÓMEZ VALENCIA

Solicita se declare prospera la excepción previa de cosa juzgada y consecuencialmente se revoque la condena en costas. Se pronunció en los siguientes términos:

PRIMERO: El a quo, en el análisis que hace respecto a la excepción previa propuesta, que se denominó “**Cosa Juzgada**”, no tiene en cuenta la voluntad de las partes de conciliar o transar sus diferencias, respecto a unos asuntos de índole laboral, los cuales quedaron implícitos dentro del documento que las partes suscribieron el 18 de mayo de 2018, con la respectiva presentación personal.

SEGUNDO: El a quo, determinó que los pagos que se hicieron por parte de mi mandante no eran válidos por cuanto no fueron discriminados de manera clara y específica, dónde se puede observar la exigencia de un ritual excesivo que en nada modifica la voluntad de las partes, pues tal como se debe juzgar en los asuntos en derecho laboral, debe “**primar la realidad sobre las formalidades**” Por lo cual se puede concluir sin ningún temor a equivocarse que el deseo tanto de la señora demandante como del señor demandado era dar por terminada una relación laboral
Y desentrañar unos problemas laborales, que ambas partes cargaban.

TERCERO: En la decisión del a quo, dónde declara que no prospera la excepción previa, de “**COSA JUZGADA**”, se debe precisar, que al momento de las partes aceptar el acuerdo, las partes en todo momento fueron asesorados por sus respectivos abogados, que inclusive tal como se evidencia en el expediente, que omitió presentar la parte demandante, acudieron a la oficina del trabajo, y que posterior a esta audiencia, acuerdan transar sus diferencias, las cuales son idénticas a las que expone en las pretensiones de la presente demanda para ser juzgadas y que anteriormente habían sido objeto de transacción.

CUARTO: En la transacción tal como se puede leer, se transaron asuntos que fueron acordes a lo que permite transar el código civil en los artículos 2469 y siguientes, por lo cual no es dable, que se precise que dicho instrumento no es acorde a lo manifestado por la corte suprema de justicia en reiterada jurisprudencia y que perfectamente se ajusta a lo normado en el artículo 2483 del código civil y 32 del código procesal del trabajo.

3. CASO EN CONCRETO

En primer lugar se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido, toda vez que conforme lo dispone el numeral 3º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto

que decida sobre excepciones previas, habiéndose formulado por la parte resistente la denominada cosa juzgada.

Para resolver, debemos tener en cuenta lo normado por el artículo 2469 del Código Civil, el cual define la transacción como *“un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.”* Se trata pues de un modo de extinguir obligaciones en el que intervienen únicamente las partes, sin intermediación del Estado o de una tercera persona facultada para ello.

Ahora, en la denominada *acta de terminación unilateral de contrato laboral por renuncia de empleado* visible a folios 35 y 36 del plenario, el 18 de mayo de 2018, se dejó plasmado un acuerdo de voluntades entre los aquí contendientes, para dar por terminado el vínculo, aunque ya estaba fenecido meses atrás, y para transar todas las diferencias que pudiesen derivarse de la relación laboral que sostuvieron entre el 31 de enero de 2009 y el 21 de agosto de 2017, naturaleza y extremos que se dejaron plasmados en dicha acta, en el acápite que denominaron antecedentes.

Y en el acápite subsiguiente, denominado soluciones, plasmaron el siguiente acuerdo:

2.1. EL EMPLEADOR acepta la renuncia que de forma irrevocable le ha presentado verbalmente a su puesto de trabajo LA EMPLEADA, la cual se vuelve a ratificar con la presente acta, En efecto, la renuncia se hace efectiva a partir del día 21 de agosto de 2017.

2.2. Que la renuncia de LA EMPLEADA pone fin al contrato de trabajo que la vinculaba con EL EMPLEADOR. Dicha decisión, además es libre, voluntaria y espontánea, sin que hayan concurrido en ella vicios de error, fuerza o dolo. LA EMPLEADA conoce perfectamente sus derechos y garantías fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y no obstante esto, ha prevalecido su deseo de no trabajar más como expresión del derecho de libertad que le asiste.

2.3. Que no obstante la renuncia que por su propia iniciativa ha presentado LA EMPLEADA y que se le ha aceptado por EL EMPLEADOR, este último, con el fin de brindarle protección y garantía a la primera, para que no interrumpa su tratamiento médico y no se vean afectados sus derechos y garantías fundamentales, le realizara los siguientes pagos:

2.3.1. La suma de CUATRO MILLONES CIENTO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS- COP-S **4'100.465 por concepto de bonificación.**

2.3.2. La suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS-COP-**\$8.899.535 por concepto de liquidación de prestaciones sociales (Prima de servicios, cesantías e interés a las cesantías) y por concepto de vacaciones remuneradas** de conformidad con los artículos 182 a 192 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARAGRAFO 2º: En virtud del pago de los conceptos de que dan cuenta los numerales 3.1. a 3.5. de este escrito, menos el descuento autorizado en el párrafo anterior, quedan canceladas las acreencias laborales causadas en razón de los antecedentes que sirven de base a este escrito, y, por tanto, EL EMPLEADOR queda a PAZ y SALVO con respecto a LA EMPLEADA, por todo concepto, como salarios, prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios), vacaciones, indemnizaciones y sanciones moratorias.

3. LA EMPLEADA acepta la liquidación de salarios, las prestaciones sociales (cesantías e intereses a esta, prima de servicios) que se determinaron en el numeral 3 de este documento e igualmente acepta que del mayor valor que se le entrega con la suscripción de documento sobre sus acreencias laborales, sea imputable y compensable a cualquier suma de dinero que por otro concepto le correspondiere.

4. La presente acta es el resultado de la reunión presencial sostenida entre las partes suscribientes, es decir el empleador y trabajador, este último expresa que no ha existido vulneración a ningún derecho fundamental, constitucional, ni laboral de alguno.

5. Del mismo modo entiende LA EMPLEADA que EL EMPLEADOR ha accedido a lo que aquella discrecionalmente le ha solicitado, sin que este hubiera tenido injerencia ni participación alguna en dicha determinación que se repite proviene de la exclusiva iniciativa de LA EMPLEADA, por lo que si esta precede en contra lo que expresamente ha declarado y dispuesto en esta acta, estaría no solo obrando de mala fe, si no también induciendo a un error para obtener un beneficio económico impropio, lo que podría desencadenar en acciones contra LA EMPLEADA de naturaleza penal, por fraude o estafa, sin perjuicio de la configuración o el concurso de otros tipos delitos y del consecuente reclame por los daños y perjuicios que con su actuar le haya ocasionado al EL EMPLEADOR por su ilegítimo proceder.
(Resaltos de la Sala)

Como todo contrato, se encuentran plenamente libres las partes para suscribirlo sin necesidad de la intervención de un tercero, aunque en **materia laboral el mismo tiene una limitante únicamente en el objeto**, pues sólo se podrán transar los **derechos inciertos y discutibles de un trabajador**, dado la naturaleza y el atributo de irrenunciabilidad de otros derechos, pues de lo contrario el acuerdo adolecería de un vicio de nulidad.

El contrato de transacción válidamente celebrado (capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos) según los principios generales del derecho, debe tenerse como ley para las partes contratantes, conforme lo estipula el código civil. Quiere decir lo anterior que cuando el pensamiento y el querer de quienes suscriben el acuerdo queda plasmado en el clausulado de un contrato, disposiciones que en todo caso deben ser claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de los contratantes.

El acta aludida, aunque expresamente NO se indica, realmente es la concreción de una transacción y/o conciliación, mecanismos de solución de conflictos que están amparados por la fuerza de la cosa juzgada, por lo que en principio, y en concordancia con la presunción de buena fe que rige los contratos, no puede ponerse en tela de juicio lo acordado, óptica bajo la cual se enerva cualquier litigio que se intente posteriormente a su celebración sobre asuntos que en forma concreta o implícita precavieron las partes.

Consúltese el Decreto 1818 de 1998 en cuyo artículo 3 se estipuló que:

ARTICULO 3o. EFECTOS. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.

La cosa juzgada por regla general implica que no es posible someter a un nuevo proceso el caso ya resuelto, decisión que igualmente es vinculante para el órgano jurisdiccional, pues tal atributo limita a la autoridad al no poder alterar los términos de la transacción, garantizando la seguridad jurídica, pues la misma es definitiva e inmutable.

En relación al petitum es importante aclarar que para que haya identidad en éste, el proceso debe versar sobre un objeto, en donde las prestaciones o declaraciones que se reclaman son precisamente los puntos sobre los cuales ya se concilió o transigió.

No obstante lo anterior, razón le asiste al a quo cuando aduce que la sola existencia del acta en mención, NO impide al juez natural de la causa examinar el conflicto que se presenta, ni ciegamente avalar su contenido obviando si es o no jurídicamente válido, especialmente cuando existen derechos ciertos e indiscutibles que NO se pueden desconocer, máxime si, como en este caso, NO media discusión en torno a la naturaleza del vínculo que unió a las partes.

Profusa es la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en torno a este tópico, cuyos apartes procedemos a resaltar.

En la sentencia de radicación 70.832 de julio de 2020, señaló que para que un derecho pierda la calidad de cierto e indiscutible, no basta con que el empleador lo cuestione en el curso de un proceso, de manera tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser renunciable por el trabajador, so pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento. Esto dijo:

A juicio de la Sala, el Tribunal no cometió los quebrantos jurídicos enrostrados por la censura, en tanto acompasó su decisión a lo adocinado por esta Sala en torno al carácter irrenunciable de derechos laborales, como el que fue materia de debate, por manera que no resulta viable conciliar o transigir cuando tengan naturaleza cierta e indiscutible a la luz de los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo.

(...) Tampoco es de recibo el argumento de la censura de que los efectos de cosa juzgada de la conciliación, impiden su control jurisdiccional, toda vez que, de un lado, la verificación de su validez, se adecúa a las controversias que competen a los jueces del trabajo, conforme al numeral 1 del artículo 2 del rito laboral y, de otro, la jurisprudencia de la Sala tiene enseñado que el efecto de cosa juzgada en esos eventos es relativo, en tanto tales declaraciones de voluntad o actos jurídicos, no adquieren la inmutabilidad propia de las decisiones judiciales en firme, cuando se encuentran afectadas por un vicio del consentimiento, causa u objeto ilícitos o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, lo que en consecuencia, abre la puerta a su revisión judicial,

Quiere esto decir que aunque las partes lleguen a un acuerdo, el mismo NO es válido si se afectan derechos que son irrenunciables.

En similar sentido razonó recientemente la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 76.431 de agosto de 2020 cuando expresó que:

esta Sala ha enseñado que un derecho laboral no pierde la connotación de cierto e indiscutible, por el simple hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de ser así, cualquier beneficio o garantía podría ser objeto de renuncia por parte del trabajador en contravía de la restricción, impuesta tanto por la Constitución Política como por el legislador, a la facultad de aquél de disponer de los derechos causados en su favor.

(...) Y es que, si bien toda relación contractual está precedida por el principio de la autonomía de la voluntad privada, esa *libertad contractual* en las relaciones laborales se encuentra limitada por los principios tuitivos del derecho del trabajo y de la seguridad social --que propenden por garantizar los derechos y prerrogativas mínimas del trabajador--, quien dada su condición de subordinado se convierte en la parte más débil de la relación laboral.

Así las cosas, los razonamientos de la recurrente, si realmente era su voluntad socavar la decisión de segunda instancia, debían estar dirigidos a atacar los postulados del Tribunal conforme a los cuales el acuerdo conciliatorio celebrado no logró el efecto de cosa juzgada en razón a que el objeto de la misma constituye un derecho cierto e indiscutible..

Así por ejemplo, en sentencia del 14 de diciembre de 2007 (Rad. 29332), reiterada, entre muchas otras, en sentencia del 17 de febrero de 2009 (Rad. 32051), expresó la Corte:

[...] el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales.

El mismo pensamiento se ha plasmado en sentencias como las 79246 y 73860, ambas expedidas en septiembre de 2020, última en la que señaló que *los acuerdos de conciliación deben ser analizados en su contexto, de manera razonable, de ahí que no es dable entenderlos de manera ligera.*

Quiere esto decir, descendiendo al caso objeto de estudio, que de acreditarse la prosperidad de la excepción que en tal sentido se propuso (claro está, NO en etapa temprana como esta, sino en la emisión de la sentencia, previa evacuación las pruebas), habría de señalarse que únicamente recaería respecto de algunas de las pretensiones enunciadas en el líbello genitor donde no existe certeza jurídica sobre su existencia, por lo que precisamente se acude a los estrados judiciales en busca de su declaratoria. En este orden de ideas, si la transacción no adolece del vicio que se endilga, podría implicar una renuncia lícita a hacer valer el tipo de reclamos que aquí se ventilan.

NO obstante lo anterior, hay otras pretensiones frente a las que NO es admisible desconocer derechos ciertos, de ahí que como acertadamente lo indicó el a quo, antes de impartirle aprobación a la transacción, deben tasarse los mismos para efectos de examinar si el pago realizado por el empleador que ascendió a \$8.899.535, cubrió tales haberes, además de analizar si en efecto se registran en Protección S.A. los pagos que dice el empleador que sí efectuó al régimen pensional, pues ello es lo que afirma al contestar.

Incluso, en gracia de discusión, el acta allegada NO tendría la virtualidad, por lo menos NO en esta etapa, de terminar el proceso por la llana razón que el acuerdo NO versa sobre la totalidad de pretensiones, dado que necesariamente continuaría, bajo dicho matiz, por el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, pretensión enunciada en el numeral décimo del correspondiente acápite.

Y es que según lo analizado por la Corte Suprema de Justicia en providencia AL818-2021, radicación 82.432, rememorando apartes de la AL1761-2020, para que sea procedente la aprobación de una transacción, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos:

En ese contexto, la Sala considera necesario destacar que existen unos presupuestos cuyo cumplimiento es indispensable para que proceda la aprobación de la transacción, esto es, que: (i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) **el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible**; (iii) el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador.

(Resaltos propios)

Y más adelante nos recordó que:

(...) no podemos dejar de lado que nos encontramos ante un derecho de la seguridad social que ha sido catalogado constitucionalmente como irrenunciable, entre ellos las pensiones, de ahí que esta Sala en sentencia CSJ SL4559-2019 expuso:

No obstante, cabe resaltar que ciertos derechos de la seguridad social, importantes para el tejido social, como son las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez, son imprescriptibles. Así, se desprende del artículo 48 de la Constitución Política, cuyo texto le otorga a los derechos subjetivos emanados de la seguridad social el carácter de irrenunciables, lo que significa que pueden ser justiciados en todo tiempo.

De esta manera, esta Corporación ante renovados y sólidos argumentos ha señalado que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL, la actualización de la pensión, el derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales y la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL 23120, 19 may. 2005; CSJ SL 28552, 5 dic. 2006; CSJ SL 40993, 22 en. 2013; CSJ SL6154-2015, CSJ SL8544-2016, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019).

Así, al ser la seguridad social un derecho subjetivo de carácter irrenunciable es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción. Luego, es una prerrogativa que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.

Y es que en materia de seguridad social, a diferencia de algunos haberes laborales, median derechos que son irrenunciables, al margen de la discusión que sobre su procedencia se pueda suscitar en el marco de un proceso judicial, los cuales NO pueden ser desconocidos, incluso bajo el ropaje de una transacción.

En este orden de ideas, atendiendo a lo dispuesto en el precedente en cita, habrá de CONFIRMARSE la decisión objeto del recurso de alzada, lo que en parte alguna significa que el acta suscrita no tenga ninguna validez o no surta efectos (incluso ni siquiera se menciona la existencia de un vicio por la trabajadora), sino que, se insiste, hay derechos ciertos que primero deben ser tasados para efectos de establecer si el pago tardío efectuado por el empleador es o no deficitario, al margen que en el documento NO se hubiesen discriminado a que correspondía cada valor, omisión que en nada incluye en la decisión aquí adoptada.

Se condenará en costas en esta instancia a la parte demandada por no haber tenido éxito en el recurso, fijándose como agencias en derecho la suma de \$500.000.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

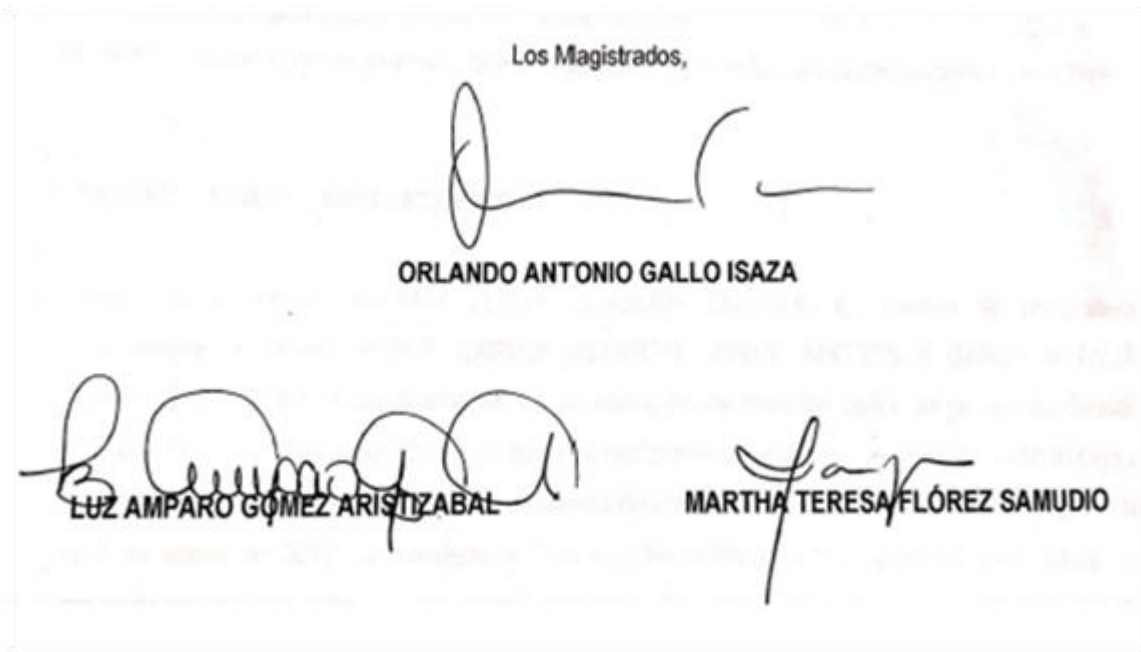
DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la decisión proferida el 24 de junio de 2021 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín mediante el cual declaró NO probada la excepción previa de cosa juzgada, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **SONIA ELENA BETANCUR AMARILES** contra el señor **FERNEY ADOLFO GÓMEZ VALENCIA**, identificados con la cédula de ciudadanía Nro. 43.482.884 y 70.904.615, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: en esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho la suma de \$500.000

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)



CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 115 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 05 DE JULIO DE 2022

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>